



Informe de la República de Colombia sobre las medidas adoptadas y el progreso realizado en la implementación de las recomendaciones formuladas por el Comité de Expertos del MESICIC.¹

La República de Colombia presenta el siguiente informe en cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento del Comité de Expertos para el seguimiento a la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, que determina en su artículo 31 que en la Primera Reunión del año cada Estado Parte informará verbal y brevemente sobre las medidas adoptadas entre la primera reunión del año anterior y la que se inicia, en relación con las recomendaciones formuladas por el Comité y las dificultades que haya tenido en la implementación de tales recomendaciones, así como sobre otros avances relativos a la implementación de la Convención, durante dicho período.

Cabe destacar que el año pasado, en calidad de país analizado, Colombia entregó en su respuesta al cuestionario un completo informe sobre los avances en la implementación de las recomendaciones formuladas por el Comité en la Primera Ronda². Por esta razón, la República de Colombia centrará este informe en las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas por el Comité de Expertos en la Duodécima Reunión Ordinaria celebrada en el mes de diciembre, en el marco de la Segunda Ronda³ de análisis.

SECCIÓN I: AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LA SEGUNDA RONDA

RECOMENDACIÓN: 1.1.1. Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos en la Rama Ejecutiva y las entidades territoriales. Para cumplir con esta recomendación, la República de Colombia podría tener en cuenta las siguientes medidas:

- **Medida a):** Continuar adoptando las medidas pertinentes para armonizar los diferentes sistemas de carrera con el sistema general para evitar la fragmentación de los sistemas específicos y

1 El artículo 31 del Reglamento del Comité de Expertos del MESICIC establece: Informes en el marco de las reuniones plenarios del Comité. En la primera reunión del Comité de cada año, cada Estado Parte informará verbal y brevemente sobre las medidas que su Estado ha adoptado entre la primera reunión del año anterior y la que se inicia, en relación con las recomendaciones que le ha formulado el Comité. Asimismo, podrá informar sobre las dificultades que haya tenido en la implementación de tales recomendaciones y sobre otros avances relativos a la implementación de la Convención, durante dicho período. Las copias electrónicas de esos informes, que serán redactados en un formato estándar aprobado por el Comité y que no podrán exceder las cinco (5) páginas, serán publicadas en la página en Internet del mecanismo.

2 En la primera Ronda fueron objeto de análisis los artículos de la Convención sobre Normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas y mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de dichas normas de conducta (Artículo III, numerales 1 y 2); sistemas para la declaración de ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que desempeñan funciones públicas (Artículo III, numeral 4); órganos de control (Artículo III, numeral 9); participación de la sociedad civil en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción (artículo III, numeral 11) y asistencia y cooperación (Artículo XIV).

3 En las Segunda Ronda son objeto de análisis los artículos de la Convención sobre Sistemas para la contratación de funcionarios públicos y para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado (Artículo III, numeral 5 de la Convención); sistemas para protección de funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción (Artículo III, numeral 8 de la Convención); la tipificación de actos de corrupción (Artículo VI de la Convención).



especiales de ley con el general de carrera administrativa, sin perjuicio de los casos expresamente previstos en su Constitución Política, guiándose para esto por los principios de publicidad, equidad y eficiencia previstos en la Convención.

Acciones adelantadas: Con fundamento en la normatividad existente sobre la materia y con el fin de armonizar los sistemas de carrera, la Corte Constitucional mediante sentencias C-1230 de 2005 y C-175 de 2006 se ha pronunciado en el sentido de delegar a la CNSC la administración y vigilancia de las carreras específicas y especiales de ley, con ello, se armonizan los sistemas especiales y específicos de carrera con el sistema general, ya que el papel de la Comisión frente a estos sistemas, sin la emisión de las Sentencias, era de vigilancia y una vez expedidas las sentencias pasó a administrarlos, razón por la cual la Comisión debe adelantar los procesos de selección para proveer los cargos vacantes que se presenten en las entidades con dichos sistemas específicos. En este sentido, La CNSC viene adelantando las convocatorias Nos. de 02 a 53 que incluyen concursos para proveer cargos para docentes y directivos docentes, así como para el INPEC, la DIAN, y el DAS.

- **Medida b):** Continuar avanzando en el desarrollo del proceso de selección iniciado mediante la Convocatoria 001 de 2005 para proveer por concurso los empleos de carrera administrativa que se encontraban provistos en condiciones de provisionalidad y encargo, y llevarlo a su culminación.

Acciones adelantadas: Se concluyó la fase I sobre la cual se informó de manera permanente al Comité de Expertos del MESICIC en los informes semestrales de avance de la aplicación de la Convención y en la respuesta al cuestionario para el examen de las normas seleccionadas para ser analizadas en Segunda Ronda. En la actualidad se continúa adelante con la segunda fase de la convocatoria en la que participan **203.071** aspirantes: **169.154** del 2006 y **33.917** del 2007.

Toda la información sobre las convocatorias y los actos administrativos del proceso de selección del sistema general de carrera administrativa correspondiente a la Convocatoria No. 001 de 2005 se encuentra en la Página web de la CNSC www.cnsc.gov.co

- **Medida alternativa 1):** Con el fin de fortalecer los sistemas para la contratación de funcionarios públicos, el sistema de Información y Gestión del Empleo Público para el Estado Colombiano – SIGEP –, que está en proceso de implementación, tiene contemplado contener un módulo de ingreso, en el cual se sistematizarán los procesos de selección por meritocracia y se hará un control estricto del cumplimiento de requisitos para optar al servicio público.

RECOMENDACIÓN 1.1.2: Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos en la Rama Legislativa. Para cumplir con esta recomendación, la República de Colombia podría tener en cuenta la siguiente medida:

- Expedir, a través de la ley correspondiente, el Estatuto de Carrera Administrativa de la Rama Legislativa, guiándose para esto por los principios de publicidad, equidad y eficiencia previstos en la Convención, sin perjuicio de la aplicación de las normas generales de Carrera Administrativa que rigen para la Rama Ejecutiva del Poder Público, en lo que sean compatibles, mientras se expide dicho Estatuto, tal como lo dispone el artículo 384 de la Ley 5 de 1992.



Acciones adelantadas: En primer lugar es importante señalar que para la expedición del Estatuto de Carrera Administrativa de la Rama Legislativa se requiere la aprobación de una ley Ordinaria, que demanda cuatro (4) debates, dos (2) en la Cámara de Representantes y dos (2) en el Senado de la República.

En el período comprendido entre la legislatura que inició su trámite el 20 de julio de 2006 y la fecha se presentaron dos proyectos de ley: el número 121 de 2006 Cámara “por el cual se establece el Sistema de Carrera Administrativa de la Rama Legislativa” y su acumulado, el proyecto número 166 de 2006 Cámara “por medio del cual se expiden las normas específicas de Carrera Legislativa para los empleados de la Rama Legislativa del poder público y se dictan otras disposiciones”. El proyecto fue aprobado en sus dos debates en la Cámara de Representantes y actualmente se encuentra pendiente de discusión y aprobación en la Comisión Séptima del Senado de la República (Tercer Debate). La ponente asignada es la Senadora Dilian Francisca Toro.

RECOMENDACIÓN 1.1.3. Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos en la Rama Judicial. Para cumplir con esta recomendación, la República de Colombia podría tener en cuenta las siguientes medidas:

- **Medida a):** Expedir la ley ordinaria que regule la carrera judicial, a la que se alude en el artículo 204 de la Ley 270 de 1996, guiándose para esto por los principios de publicidad, equidad y eficiencia previstos en la Convención.

Cabe aclarar que si bien la expedición de leyes en Colombia está a cargo de la Rama Legislativa, el Consejo Superior de la Judicatura posee iniciativa legislativa según el artículo 257-4 de la Constitución Política. Por ello, a partir del año 2008 se viene trabajando con un grupo de abogados a efectos de presentar un proyecto de ley que regule la carrera judicial y establezca el régimen para las situaciones laborales administrativas de los funcionarios y empleados judiciales.

- **Medida b):** Adoptar, a través de la autoridad correspondiente, las medidas pertinentes para culminar los procesos de selección relativos a los “Empleados Dirección Ejecutiva de Administración Judicial” y a los “Empleados Sala Administrativa Consejo Superior de la Judicatura”.

Con relación al proceso de selección de los empleados de la Dirección Ejecutiva, se dictó la resolución No. 436 de 2.007, por medio de la cual se conformaron los registros de elegibles para la provisión de tales cargos. Posteriormente se conformaron las correspondientes listas de elegibles con las cuales se han venido verificando los respectivos nombramientos.

De otro lado, el proceso de selección de los empleados de la Sala Administrativa demanda realizar la homologación de algunas inscripciones, en especial de aquellos cargos que por una u otra razón fueron suprimidos o trasladados; esto es, adelantar el procedimiento previsto en los Acuerdos 1586/02 y 4156/07. Esta labor se está adelantando y se espera culminarla en el mes de junio de 2008; para luego, si es del caso, expedir el correspondiente registro de elegibles.



RECOMENDACIÓN 1.1.4. Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos en la Fiscalía General de la Nación. Para cumplir con esta recomendación, la República de Colombia podría tener en cuenta las siguientes medidas:

- **Medida b):** Adoptar, a través de la autoridad correspondiente, las medidas pertinentes para adelantar y culminar el concurso de méritos para proveer los cargos del régimen de la Fiscalía General de la Nación.

La Fiscalía General de la Nación en estricto cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales pertinentes, de las órdenes que sobre el sistema de carrera ha impartido la Corte Constitucional y de las metas trazadas en el direccionamiento estratégico institucional para el periodo 2005-2009, el pasado 9 de septiembre de 2007 dispuso convocar a concurso de méritos diversos cargos a través de las siguientes convocatorias públicas y abiertas:

Convocatoria	Denominación del Cargo
001-2007	Fiscal Delegado ante Jueces Municipales y Promiscuos.
002-2007	Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito
003-2007	Fiscal Delegado ante Jueces de Circuito Especializados
004-2007	Fiscal Delegado ante Tribunal de Distrito
005-2007	Asistente de Fiscal I, II, III, IV
006-2007	Asistente Judicial IV.

Actualmente este proceso de selección ha superado las etapas de presentación de documentos de los aspirantes, verificación de los requisitos mínimos, publicación de los listados de admitidos y no admitidos, presentación de reclamaciones, respuesta a las reclamaciones, citación y presentación del examen de conocimientos, según el cronograma diseñado para el efecto.

De otro lado, el 28 de diciembre de 2007 la Fiscalía General de la Nación suscribió con la Universidad Nacional de Colombia el convenio interadministrativo número 0106 de 2007, cuyo objeto corresponde al adelantamiento de un proceso de selección mediante concurso público y abierto de méritos para proveer los cargos de carrera con funciones administrativas, para lo cual la Comisión Nacional de Administración de Carrera ha dispuesto que se adelanten las labores pertinentes para definir los aspectos sustanciales que conformarán las respectivas convocatorias de este concurso, así como los lineamientos generales y específicos para las pruebas y los aspectos logísticos de la misma.

Finalmente cabe anotar que la definición de los parámetros del concurso de méritos para el Cuerpo Técnico de Investigación – CTI – es un tema sobre el que se viene trabajando, para proceder a avocar su estudio y decisión por parte de la Comisión Nacional de Administración de Carrera.



RECOMENDACIÓN 1.2: Fortalecer los sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado. Para cumplir con esta recomendación, la República de Colombia podría tomar en cuenta las siguientes medidas:

- **Medida a):** Avanzar en la revisión de los fundamentos y pertinencia de los regímenes especiales de contratación, al igual que en la adopción de las medidas pertinentes para lograr la armonía necesaria que el manejo de diversos regímenes en esta materia supone, guiándose para esto por los principios de publicidad, equidad y eficiencia previstos en la Convención.

Acciones adelantadas: La Ley 1150 de 2007 en su artículo 13 estableció que las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, deben aplicar en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso, por lo cual estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal.

- **Medida b):** Modificar el artículo 13 de la Ley 80 de 1993, de tal manera que si en los en los contratos o convenios financiados con fondos de organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales, se encuentran involucrados mayoritariamente recursos públicos de las entidades estatales, deba darse aplicación a lo dispuesto para dichas entidades en el Estatuto General de Contratación.

Acciones adelantadas: El artículo 32 de la ley 1150 de 2007 derogó expresamente el inciso 4° del artículo 13 de la ley 80 de 1993 que establecía la exclusión del régimen de contratación para aquellos celebrados con personas extranjeras.

Adicionalmente la mencionada Ley en su artículo 20, señala que tratándose de contratación con organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales, estos deben someterse a los procedimientos de la ley 80 de 1993, salvo que el 50% o más del valor del mismo sea financiado con recursos de cooperación, asistencia o ayuda internacional, evento en el cual se podrán regir por los reglamentos de tales entidades.

- **Medida c):** Modificar el artículo 24, literal c) de la Ley 80 de 1993, circunscribiendo la contratación directa, cuando se trate de la celebración de contratos interadministrativos, a aquellos casos en los que el objeto del contrato a ser celebrado entre las entidades estatales tenga relación directa con las funciones encomendadas a las mismas.

Acciones adelantadas: El artículo 32 de la Ley 1150 derogó íntegramente el numeral 1° del artículo 24 de la Ley 80 contenido del literal c).

Adicionalmente, la mencionada Ley en el literal c), numeral 4, artículo 2 señala que la contratación directa procede entre otros casos, cuando se trata de contratos interadministrativos; sin embargo, condiciona esta contratación al hecho de que las obligaciones derivadas del contrato tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos, exceptuando los contratos de obra, suministro, encargo fiduciario y fiducia pública cuando las instituciones de educación superior públicas sean las ejecutoras. Añade la norma



referida que estos contratos podrán ser ejecutados por las mismas, siempre que participen en procesos de licitación pública o de selección abreviada.

- **Medida d):** Modificar el artículo 24, literal g) de la Ley 80 de 1993, disponiendo que cuando se declare desierta la licitación o concurso, se acuda a un nuevo proceso de selección, diferente a la contratación directa, a través del cual se garanticen también los principios de publicidad, equidad y eficiencia previstos en la Convención.

Acciones adelantadas: La Ley 1150 de 2007 en su artículo 32 derogó íntegramente el numeral 1° del artículo 24 de la Ley 80 contenido del literal g) al que se hace referencia en esta recomendación.

Con la expedición de la Ley 1150 de 2007, se establece en el artículo 2, numeral 2, la figura de la selección abreviada, que corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. Conforme a lo dispuesto en el artículo 2 numeral 2 literal d) de la norma en comento, aplica la selección abreviada entre otros casos, cuando el proceso de licitación pública ha sido declarado desierto, evento en el cual la entidad deberá iniciar la selección abreviada dentro de los cuatro meses siguientes a la declaración de desierto del proceso inicial.

La modalidad denominada “selección abreviada”, contemplada en la Ley 1150 permite adelantar procedimientos de selección que, basados estrictamente en los principios de la contratación pública, generen de manera ágil la adopción de decisiones de selección.

- **Medida e):** Modificar el artículo 24, literal h) de la Ley 80 de 1993, disponiendo que se acuda a un nuevo proceso de licitación o concurso y no a la contratación directa, cuando no se presente propuesta alguna o ninguna propuesta se ajuste al pliego de condiciones, o términos de referencia o, en general, cuando falte voluntad de participación, sin perjuicio de introducir a dicho proceso las modificaciones que se estimen pertinentes para lograr una participación efectiva de proponentes en el mismo.

Acciones adelantadas: La Ley 1150 de 2007 en su artículo 32 derogó íntegramente el numeral 1° del artículo 24 de la ley 80 de 1993 contenido del literal h).

A su vez la mencionada Ley establece en su artículo 2, numeral 4, que la modalidad de selección de contratación directa, solamente procederá en los casos señalados en el mismo artículo, entre los que no está comprendido el supuesto relacionado con la recomendación en cuestión.

- **Medida f):** Modificar el artículo 27 de la Ley 80 de 1993, contemplando las previsiones que sean necesarias, tales como la determinación de los riesgos susceptibles de compensación, a fin de evitar que con base en dicha norma se puedan reclamar a las entidades estatales compensaciones de utilidades por hechos imprevistos que forman parte de la naturaleza aleatoria de los negocios, más allá de lo pactado por éstas como contraprestación en el respectivo contrato.

Acciones adelantadas: La Ley 1150 de 2007, en su artículo 32 derogó un aparte del segundo inciso del artículo 3° de la ley 80 de 1993, que establecía la garantía de utilidad para los



contratistas y lo sustituye por una adecuada distribución del riesgo en la que participan los proponentes.

A su vez, la Ley 1150 de 2007 señala en su artículo 4 “De la distribución de riesgos en los contratos estatales” que los pliegos de condiciones o sus equivalentes incluyan la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación. Señala además que en las licitaciones públicas, los pliegos de condiciones de las entidades estatales deberán señalar el momento en el que, con anterioridad a la presentación de las ofertas, los oferentes y la entidad revisarán la asignación de riesgos con el fin de establecer su distribución definitiva.

- **Medida g)** Derogar el artículo 20 del Decreto 855 de 1994, que dispone que en los eventos de contratación directa no previstos en dicho decreto, el contrato se podrá celebrar tomando en cuenta los precios de mercado y sin que sea necesario obtener previamente ofertas o publicar avisos de invitación a contratar.

Acciones adelantadas: El Decreto 066 de 2008 reglamentario de la Ley 1150 de 2007 derogó expresamente el Decreto 855 de 1994. A su vez, el numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 establece las causales de contratación directa que se establecen por excepción para eventos en los que no es posible la convocatoria pública.

- **Medida h):** Adoptar las medidas pertinentes, a través de la autoridad correspondiente, para precisar los criterios de selección objetiva de los contratistas, guiándose para ello por los principios de publicidad, equidad y eficiencia previstos en la Convención.

Acciones adelantadas: La Ley 1150 de 2007 en su artículo 5 establece criterios mucho más específicos al tratar el tema de la selección objetiva. En este sentido establece la mencionada Ley que es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. En consecuencia, señala esta Ley que los factores de escogencia y calificación que establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, tendrán en cuenta los siguientes criterios:

1. La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje. La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor. La verificación documental de las condiciones antes señaladas será efectuada por las Cámaras de Comercio, de acuerdo con lo cual se expedirá la respectiva certificación.

2. La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. En los contratos de obra pública, el menor plazo ofrecido no será objeto de evaluación. La entidad efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores designados para ello.



3. En los pliegos de condiciones para las contrataciones cuyo objeto sea la adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y común utilización, las entidades estatales incluirán como único factor de evaluación el menor precio ofrecido.

En los procesos para la selección de consultores se hará uso de factores de calificación destinados a valorar los aspectos técnicos de la oferta o proyecto. De conformidad con las condiciones que señale el reglamento, se podrán utilizar criterios de experiencia específica del oferente y del equipo de trabajo, en el campo de que se trate. En ningún caso se podrá incluir el precio, como factor de escogencia para la selección de consultores.

- **Medida i):** Derogar el parágrafo del artículo 11 del Decreto 2170 de 2002, que dispone que cuando el valor del contrato por celebrar sea igual o inferior al 10% de la menor cuantía a que se refiere el literal a) del numeral 1° del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, las entidades podrán celebrarlo tomando como única consideración los precios del mercado, sin que se requiera obtener previamente varias ofertas.

Acciones adelantadas: El Decreto 066 de 2008, reglamentario de la Ley 1150 de 2008, a través de su artículo 83 derogó el decreto 2170 de 2002 salvo los artículos 6, 9 y 24 del mismo.

En este sentido el artículo 46 del mencionado Decreto 066 de 2008, reglamentario de la Ley 1150 de 2007, dispone que cuando el valor del contrato por celebrar sea inferior al 10% de la menor cuantía (mínima cuantía), se regirá por el manual de contratación de la entidad sin olvidar que deben seguirse en todo caso los principios que rigen la función pública.

- **Medida m):** Adoptar las medidas pertinentes para vincular al Portal Único de Contratación a las entidades estatales que aún no se encuentren vinculadas al mismo.

Acciones adelantadas: El Programa Agenda de Conectividad con el fin de continuar vinculando a las entidades al Portal Único de Contratación, www.contratos.gov.co, ha adelantado acciones de gestión, articulación y divulgación, lo que han permitido el logro de los siguientes resultados:

	A 31 de diciembre de 2006	A 31 de diciembre de 2007	A 31 de marzo de 2008
No. de entidades registradas en el Portal.	315	1.605	2.023
No. anual de entidades publicando información sobre sus procesos contractuales en el Portal.	245	1.389	741
No. anual de visitas mensuales en promedio.	76.218	366.264	288.419
No. anual de procesos de contratación publicados.	11.342	48.846	10.423
Cuantía anual de procesos de contratación publicados (millones de \$)	8.710.055	19.293.305	3.408.094

A 31 de diciembre de 2006 se registraron 245 entidades publicando en el Portal Único de Contratación y a 31 de diciembre de 2007 se cuenta con 1.389 entidades que han publicado la



información en el Portal, lo cual significa un aumento del 567%. Del 1° de enero a 31 de marzo de 2008, 741 entidades han publicado información de sus procesos de contratación en el Portal.

En cuanto al número de procesos publicados en el Portal, durante el año 2006 se publicó información de 11.342 procesos, mientras que durante el año 2007 se publicaron 48.846 procesos, lo cual corresponde a un aumento del 431%. Esto significa que en un año se cuadruplicó el uso del Portal por parte de las entidades públicas, para publicar sus procesos de contratación. En relación con la cuantía de los procesos publicados, durante el año 2006 ascendió a 8.7 billones de pesos y durante el año 2007 a 19.3 billones de pesos. Entre el 1° de enero del 2008 y el 31 de marzo de 2008, se han publicado 10.423 procesos por una cuantía de 3.4 billones de pesos.

El aumento del número promedio de visitas al portal también es significativo: durante el año 2006 el promedio mensual de visitas fue de 76.218, mientras que durante el año 2007 fue de 366.264.

- **Medida n):** Continuar adelantando las acciones necesarias para implementar el Sistema Electrónico de Contratación.

La ley 1150 de 2007 estableció en su artículo 3 que el Gobierno Nacional debe desarrollar el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, el cual debe integrar el Registro Único Empresarial de las Cámaras de Comercio, el Diario Único de Contratación Estatal y los demás sistemas que involucren la gestión contractual pública, debiendo articularse también con el Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal – SICE, sin que este último pierda su autonomía para el ejercicio del control fiscal a la contratación pública.

En el proceso de implementación de este sistema, tanto el Gobierno Nacional como la Contraloría General de la República han prestado su concurso para estructurar en materia de contratación pública la estrategia que permita integrar eficazmente el SICE de la Contraloría y el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP. Es importante destacar que en el trabajo que se viene adelantado, la autonomía de la labor de control fiscal ha sido una preocupación constante del Gobierno Nacional para lo cual es claro que todos los aspectos atinentes a la integración de los sistemas de información deberán tener la aprobación de la Contraloría.

El trabajo de integración que ahora se está adelantando apunta a definir con claridad el sitio de ingreso de información, de manera que los usuarios de las aplicaciones la deban ingresar en un solo sitio al tiempo que los sistemas la comparten en forma automática según los acuerdos que se logren. Aunque es posible que este propósito sólo se alcance después de varios años, se está delimitando conjuntamente el mapa de información de los dos sistemas, definiendo en cada caso el responsable de la recolección de la información y la forma como debe compartirse con el SICE o SECOP, según el caso, o incluso con cualquier otro sistema de información que lo requiera.

El tema del Catálogo Único de Bienes y Servicio ha sido sin duda el más complicado de abordar, debido precisamente al papel tan importante que cumple al interior de los dos sistemas de información. Por esto se han estudiado diferentes alternativas que hagan viable a mediano y largo plazo la integración de estos sistemas de información teniendo siempre como criterios la eficiencia del proceso de contratación, la realidad del mercado en el cual se insertan las compras públicas, el escenario globalizado que es una realidad en la contratación pública y que se hace más palpable cada día gracias a la contratación electrónica y la necesidad de que la información electrónica que se recaude sirva de base para la realización de la labor de control fiscal. En la actualidad se está evaluando una alternativa acordada conjuntamente con la Contraloría que



implicaría la utilización del CUBS en el SECOP, partiendo de la depuración que del mismo haga la Contraloría.

RECOMENDACIÓN 4.1: Diseñar e implementar, cuando corresponda, programas de capacitación de los servidores públicos responsables de la aplicación de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados en el presente informe, con el objeto de garantizar su adecuado conocimiento, manejo y aplicación.

Acciones adelantadas: Se expidió el nuevo Plan Nacional de Formación y Capacitación para servidores públicos mediante el Decreto 4665 de noviembre de 2007, que establece los lineamientos conceptuales y metodológicos para el desarrollo de competencias laborales en los servidores públicos y una guía temática para el desarrollo de programas de capacitación; en esta guía se incluyen como ejes de desarrollo la Contratación pública y la Lucha contra la corrupción.

En noviembre de 2007 se realizó un programa de inducción para los 1099 alcaldes y 32 gobernadores de país, que fueron elegidos para el período 2008-2011. Dicho programa manejó una agenda orientada a señalar las políticas del Estado colombiano que competen a su desempeño como nuevos administradores de la cosa pública.

Cabe resaltar que este programa de inducción fue realizado de manera coordinada por varias entidades estatales e incluyó orientaciones sobre aspectos para la prevención de la corrupción y la necesidad de transparencia y buen manejo de los recursos públicos, enfatizando ante todo en la gran responsabilidad que les compete como líderes de la comunidad y representantes de los intereses ciudadanos.

A su vez los Órganos de control e investigación en el marco del convenio 0002 de noviembre 7 de 2007, firmado entre la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Fundación MSI Colombia operadora de la USAID, cuyo objeto es apoyar a estas entidades, a través del programa Cimientos para fortalecer los esfuerzos de lucha contra la corrupción desarrollará en los meses de junio y julio de 2008 un programa de información y formación conjunto dirigido a los gobernadores, alcaldes, servidores públicos y ciudadanía en general en 26 municipios que tienen serios problemas de gobernabilidad, cuyos tres ejes temáticos son: 1. Delitos contra la administración pública en la administración y ejecución de los recursos de regalías y SGP. 2. Control preventivo en contratación pública, manejo de regalías y SGP, así como conductas y competencias disciplinarias. 3. Control fiscal y rendición de cuentas recursos de regalías y SGP.



SECCIÓN II: DIFICULTADES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LA SEGUNDA RONDA DE ANÁLISIS

RECOMENDACIÓN 1.1.1. Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos en la Rama Ejecutiva y las entidades territoriales. Para cumplir con esta recomendación, la República de Colombia podría tener en cuenta las siguientes medidas:

- **Medida b):** Continuar avanzando en el desarrollo del proceso de selección iniciado mediante la Convocatoria 001 de 2005 para proveer por concurso los empleos de carrera administrativa que se encontraban provistos en condiciones de provisionalidad y encargo, y llevarlo a su culminación.

Dificultades en la implementación de la recomendación: El desarrollo del proceso de selección de la Convocatoria 001 de 2005, por la magnitud (antes de emisión de normas se aproximaba a casi 70.000 empleos vacantes a proveer para más de 3.000 entidades del orden nacional y territorial), se encontró con dificultades técnicas ya que el país nunca se había enfrentado a un reto de tales dimensiones y no es fácil el diseño e implementación de un proceso de estas proporciones, más cuando en la Administración Pública Colombiana se incluyó el enfoque de competencias para la gestión de su talento humano.

A su vez, en relación con el número de empleos a proveer se pasó de alrededor de 75.000 a aproximadamente 58.000, cifra que aún es incierta, ya que el Proyecto de Ley 117/07Senado - 171/07 Cámara, que fue objetado por inconstitucionalidad por el Presidente de la República afecta notablemente el proceso de selección, la oferta pública de empleos y los cronogramas para el desarrollo de la fase II del respectivo proceso.

A su vez cabe anotar que desde diciembre de 2005, fecha en la que se publicó la Convocatoria 001, por factores externos como leyes, sentencias de la Corte Constitucional y tutelas de jueces y magistrados de la República, el proceso ha sufrido ajustes que han afectado los cronogramas y actividades impidiendo el normal desarrollo de acuerdo a lo planeado por la Comisión Nacional del Servicio Civil. Dentro de los factores externos se relacionan los siguientes:

- A menos de ocho meses de emitida la convocatoria, la Ley 1033 del 18 de julio de 2006, modificó disposiciones de la Ley 909 de 2004 afectando los contenidos y procedimientos definidos en la Convocatoria 001 de 2005 y excluyó de concurso para la Prueba Básica al Sector Defensa y a las instituciones del sector salud que se encontraban en reestructuración. Así mismo, estableció que no le sería exigible la presentación de la Prueba Básica General de Preselección – PBGP a los aspirantes inscritos que cumplieran la totalidad de las condiciones fijadas en la misma Ley.
- Posteriormente, la Ley 1093 del 18 de septiembre de 2006, modificó la OPEC de la convocatoria 001 de 2005 en relación con los empleos de Asesor del Grupo III o de las entidades territoriales y distritales.
- La Corte Constitucional en Sentencia C-211 del 21 de marzo 2007 declaró la inexecutable de los incisos primero, segundo y tercero del artículo 10 de la Ley 1033



de 2006, afectando nuevamente de manera directa e inmediata el proceso de selección, por cuanto debieron ser citados a presentar la PBGP los aspirantes inscritos en la convocatoria 001 de 2005 que no fueron citados para presentar dicha prueba el 10 de diciembre de 2006.

RECOMENDACIÓN 1.1.2: Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos en la Rama Legislativa. Para cumplir con esta recomendación, la República de Colombia podría tener en cuenta la siguiente medida:

- **Medida j):** Continuar adelantando las acciones necesarias para consolidar la normativa de contratación estatal en un solo cuerpo conciso y definido, a los efectos de facilitar su aplicación por parte de los funcionarios que deben hacerlo y de procurar que resulte más clara y comprensible para quienes intervienen en la contratación estatal y para la ciudadanía en general.

Dificultades en la implementación de la recomendación: La Directiva Presidencial 01 de 2005 establece que todos los Sectores de la Administración Pública Nacional deben realizar el inventario de las normas expedidas desde 1886 sobre las que tienen competencia temática misional, analizar cada una de esas disposiciones en cuanto a su vigencia, y una vez identificado el universo normativo vigente para cada Sector, expedir decretos únicos y proyectar compilaciones legislativas.

Los decretos únicos se expiden conforme a las potestades reglamentarias que el artículo 189 confiere al Señor Presidente de la República, integran todas las disposiciones hoy vigentes que se encuentran dispersas en un sin número de decretos reglamentarios, y derogan expresamente estos. No se pretende incorporar en los decretos únicos modificaciones, ni replantear el desarrollo de temas concretos. Es posible sí, efectuar cambios formales que permitan unificar estilo, terminología, ajustar el documento a una mejor técnica legislativa o actualizar referencias normativas.

La compilación legislativa por su parte, reúne en un documento no vinculante las disposiciones con fuerza de ley que están vigentes sobre un tema en particular. Estas compilaciones están estructuradas de manera temática, pero cada tema ha de ser desarrollado de forma cronológica, sin que sea factible incorporar cambios de ningún tipo.

En atención a lo impuesto por la Directiva Presidencial 01 de 2005, el Departamento Administrativo Nacional de Planeación ha inventariado y efectuado el análisis de vigencia de las disposiciones contractuales, ha reproducido en medio magnético los textos de estas disposiciones, y trabaja en el Proyecto de Decreto Único de Contratación Pública y en la Compilación Legislativa que integra las normas con fuerza de ley vigentes sobre el tema contractual.

Cabe anotar sin embargo, que el artículo 30 de la Ley 1150 de 2007 autorizó al Gobierno a compilar en un solo cuerpo normativo la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, con el fin de tener el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

Sin embargo, el mencionado artículo fue declarado inexecutable por la Corte Constitucional mediante sentencia C – 259 de 2008, al considerar que para compilar las normas de las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 se requiere, de conformidad con el numeral 10 del artículo 150 de la

**XIII Reunión Ordinaria del MESICIC.
23 al 28 de junio de 2008**



República de Colombia
Programa Presidencial de
Modernización, Eficiencia, Transparencia
y Lucha contra la Corrupción

Constitución, de la concesión de facultades extraordinarias como quiera que se trata de la adopción y expedición de un conjunto normativo que tiene fuerza de ley y como tal requiere de esa delegación. A ello agregó también el Alto Tribunal que las atribuciones conferidas por el artículo 30 de la Ley 1150 de 2007 se inscriben dentro del concepto de código para lo cual no se pueden conferir facultades extraordinarias, al tenor de lo dispuesto en el artículo 150-10 de la Carta.